



---

# FGR

---

## FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

---

### COMITÉ DE TRANSPARENCIA<sup>1</sup>

## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 19 DE ENERO DE 2021

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional; así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



## CONSIDERACIONES

Con motivo de las publicaciones de fecha 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe tomar en consideración lo previsto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto aludido, que citan:

**Sexto.** Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, **se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.** Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos de esta Ley.

**Noveno.** A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, **así como la reestructura y definición de los órganos administrativos** y los sustantivos para la función fiscal.

III. Estrategia específica respecto al **personal en activo** y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el **diseño y activación de la nueva estructura organizativa**; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;



...  
**Décimo Segundo. El proceso de transición del personal** de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

...  
**II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña** y tendrá derecho a participar en el proceso de elección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República **en términos de los principios establecidos en la presente Ley**. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

...  
Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

**Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República** para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

**Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría**, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

...  
Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

...  
**Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas** y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador**.

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.





De lo expuesto, se concluye que en tanto **no se defina la nueva estructura orgánica de la Fiscalía General de la República**, es que este Comité de Transparencia con el fin de seguir cumplimentando las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en la materia, el citado Órgano Colegiado continuará sesionando conforme lo establece el ya citado Acuerdo A/072/16.

Atento a lo anterior, cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.

Por otra parte, es importante puntualizar que con motivo de la emergencia sanitaria a nivel internacional, relacionada con el evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública a través de la propagación del virus SARS-COVID2 y que potencialmente requiere una respuesta coordinada, es que desde el pasado viernes 20 de marzo en cumplimiento con las ~~medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se emitió el protocolo y medidas de~~ actuación en la Fiscalía General de la República, por la vigilancia epidemiológica del Coronavirus COVID-19 para la protección de todas y todos sus trabajadores a nivel nacional y público usuario, en el sentido de que en la medida de lo posible se dé continuidad operativa a las áreas sustantivas y administrativas de esta institución, tal como se aprecia en el portal institucional de esta Fiscalía:

<https://www.gob.mx/fgr/articulos/protocolo-y-medidas-de-actuacion-ante-covid-19?idiom-es>

En ese contexto, en atención al Protocolo y medidas de actuación que han sido tomadas en cuenta por diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República con motivo de la pandemia que prevalece en nuestro país, documentos emitidos el 19 y 24 de marzo del año en curso, respectivamente, por el Coordinador de Planeación y Administración, es importante tomar en cuenta el contenido de lo del artículo 6, párrafo segundo del *Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, el cual señala que:

**Artículo 6.** Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.

**La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología,** de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

En concatenación, con el numeral cuarto, fracciones I y II del Oficio circular No. C/008/2018, emitido por la entonces Oficina del C. Procurador, a saber:





**CUARTO.** Se les instruye que **comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:**

**I. Emplear mecanismos electrónicos de gestión administrativa** para minimizar el uso de papel y fomentar la operatividad interna en un menor tiempo de respuesta;

**II. Priorizar el uso de correos electrónicos como sistema de comunicación oficial** al interior de la Institución;

Así como lo escrito en el **Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias en donde se amplíe el término para dar respuesta** signado por el Comité de Transparencia en su Novena Sesión Ordinaria 2019 de fecha 5 de marzo de ese año y el **Procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), susceptible de revisión por parte del CT** aprobado por ese Colegiado el fecha 22 de junio de 2018, a través del cual se instituyeron diversas medidas de atención, entre las cuales, destaca el siguiente: **"5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en tiempo y forma fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucional", es que, el personal de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, únicamente gestionará a través de correos electrónicos institucionales, hasta nuevo aviso, todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación** establecidos en la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos, así como procedimientos de investigación y verificación, de imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, **así como diversos asuntos competencia de esta Unidad en la medida en que sus posibilidades técnicas, materiales y humanas lo permitan, hasta en tanto, no se tenga un comunicado por parte de las autoridades sanitarias que fomenten el reinicio de las actividades de manera presencial.**



## INTEGRANTES

**Lcda. Adi Loza Barrera.**

**Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidente del Comité de Transparencia.**

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).

**Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez.**

**Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega.**

**Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción X y 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como los ACUERDOS: A/009/2019 por el que se instala el Órgano Interno de Control, el A/014/2019 por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno de Control y Numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c) del A/OI/001/2019 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control entre sus unidades administrativas, publicados en el DOF el 14 de diciembre de 2018, 9 de mayo y 25 de septiembre de 2019, respectivamente.



## SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Siendo las 14:21 horas del día 15 de enero de 2021, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia remitió vía electrónica a los enlaces de transparencia, en su calidad de representantes de las Unidades Administrativas (UA) competentes, los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité de Transparencia en su Segunda Sesión Ordinaria 2021 a celebrarse el día 19 de enero de 2021, por lo que requirió a dichos enlaces, para que de contar con alguna observación al respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría Técnica y que de no contar con un pronunciamiento de su parte, se daría por hecho su conformidad con la exposición desarrollada en el documento enviado.

Lo anterior, con el fin de recabar y allegar los comentarios al Colegiado, a efecto de que cuente con los elementos necesarios para emitir una determinación a cada asunto.

En ese contexto, tras haberse tomado nota de las observaciones turnadas por parte de las UA, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia notificó a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación.

Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó tomar nota de cada una de las determinaciones, por lo que procedió a realizar la presente acta correspondiente a la **Segunda Sesión Ordinaria 2021**.





## DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:

**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la información requerida:**

- |       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| A.1.  | Folio 0001700974120 – RRA 14417/20 |
| A.2.  | Folio 0001701026820                |
| A.3.  | Folio 0001701031320                |
| A.4.  | Folio 0001701031820                |
| A.5.  | Folio 0001701031920                |
| A.6.  | Folio 0001701032020                |
| A.7.  | Folio 0001701032220                |
| A.8.  | Folio 0001701035520                |
| A.9.  | Folio 0001701039420                |
| A.10. | Folio 0001700001221                |
| A.11. | Folio 0001700001321                |

**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la documentación requerida:**

- |      |  |
|------|--|
| B.1. | Folio 0001701026120  |
| B.2. | Folio 0001701026220  |
| B.3. | Folio 0001701034420  |
| B.4. | Folio 1700700002520 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua |
| B.5. | Folio 1700700002720 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua |
| B.6. | Folio 1700700002820 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua |

**C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:**

- |      |                     |
|------|---------------------|
| C.1. | Folio 0001701031420 |
| C.2. | Folio 0001701031620 |
| C.3. | Folio 0001701032520 |
| C.4. | Folio 0001701032820 |
| C.5. | Folio 0001701032920 |
| C.6. | Folio 0001701033620 |
| C.7. | Folio 0001701033920 |
| C.8. | Folio 0001701034020 |
| C.9. | Folio 0001701034120 |



- **Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.**



## ABREVIATURAS

**FGR** – Fiscalía General de la República.

**OF** – Oficina del C. Fiscal General de la República.

**CA** – Coordinación Administrativa

**SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

**SCRPPA** – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

**SEIDO** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

**SEIDF** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

**FEMDH** – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

**CMI** – Coordinación de Métodos de Investigación

**CPA** – Coordinación de Planeación y Administración.

**CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

**CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.

**COPLADII** – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

**CFySPC** – Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

**CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

**PFM** – Policía Federal Ministerial.

**FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

**FEDE** – Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. (Antes FEPADE)

**FEAI** – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. (Antes VG)

**FEVIMTRA** – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

**UEAF** – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

**UTAG** – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

**DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.

**DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

**OIC** – Órgano Interno de Control.

**INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**LFTAIP** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales

**CNPP** – Código Nacional de Procedimientos Penales.

**CPEUM** – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.





**I. Aprobación del orden del día.**

Previa consulta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia a sus integrantes, los mismos por unanimidad aprueban el orden del día para la actual sesión.

Previa consulta de la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia a sus integrantes, los mismos por unanimidad aprueban el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2021 que se registra en la gestión de la ahora Fiscalía General de la República, celebrada el 12 de enero de 2021.

En seguimiento al desahogo del orden del día, la Secretaría Técnica de este Órgano Colegiado procede a tomar nota de las decisiones que manifestaron los integrantes del Comité de Transparencia para cada una de las solicitudes enlistadas en la presente sesión.



**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la información requerida:**

**A.1. Folio de la solicitud 0001700974120 - RRA 14417/20**

<div></div>	
<b>Síntesis</b>	Caso de las presuntas desapariciones forzadas y/o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito se me informe lo siguiente sobre el **caso de las presuntas desapariciones forzadas y/o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020**, en los alrededores de esa dependencia estatal, y que de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco fue atraído por la Fiscalía General de la República:

1 Se me informe si es cierto o no que la FGR atrajo e investiga este caso y de ser cierto, se me informe:

- a) Fecha de atracción
- b) Qué área específica lleva el caso
- c) Claves de carpeta de investigación abiertas y por cada una se precise: fecha de apertura, qué delitos se indagan, estatus actual de la carpeta de investigación
- d) Cantidad de detenidos" (Sic)

**Gestión de la solicitud:**

En respuesta inicial se indicó al particular que la **FEMDH** señaló inicialmente que no ejerció facultad de atracción al asunto en cuestión.

No obstante, ante la respuesta otorgada por el particular, este recurrió la respuesta arguyendo lo siguiente:

**Acto recurrido:**

Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado, pues dio por inexistente información sobre la cual hay pruebas de que sí existe, por lo cual su resolución no permitió que pudiera ejercer mi derecho de acceso a la información.

Recurro todos los puntos de mi solicitud por los siguientes motivos:

1 El sujeto obligado dio por inexistente toda la información solicitada, que consiste en la atracción del caso de presuntas desapariciones y/o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco, el 5 de junio de 2020, en las inmediaciones de esta dependencia, en contra de jóvenes manifestantes.

Sin embargo, como prueba de que dicha información sí existe, adjunto un comunicado del gobernador, Enrique Alfaro, donde informa a la opinión pública que la Fiscalía General de la



República (FGR) atraerá el caso; así como una nota periodística que recoge las declaraciones del fiscal de Jalisco, donde también señala que el caso ya fue atraído por la FGR.

Comunicado del gobernador:

Guadalajara, Jalisco,

09 de junio de 2020

Enrique Alfaro pide a la FGR que atraiga las investigaciones por los hechos ocurridos en las manifestaciones del viernes en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal

-Afirmó que el Fiscal Estatal estará en la CDMX para poner a disposición de la FGR todos los elementos de prueba -

-Por los hechos del viernes ya están detenidos dos policías ministeriales de la FE

-Además, Alfaro Ramírez anunció hoy que se retiraron los cargos a los seis jóvenes detenidos el sábado pasado por cometer actos vandálicos en el centro de Guadalajara

**El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que pedirá al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que atraiga las investigaciones por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del viernes 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía, por la cual ya existen dos policías ministeriales detenidos.**

El mandatario jalisciense agregó que en estos momentos va rumbo a la Ciudad de México el Fiscal Estatal para poner a disposición todos los elementos de prueba con que se cuenta hasta el momento.

**"La Fiscalía General podrá continuar con la investigación de manera independiente e imparcial para dar con los responsables. Mi compromiso es que este no será un capítulo más de impunidad. No vamos a solapar a nadie y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó el Gobernador jalisciense, quien agregó que desde el viernes pasado la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas abrió de oficio una carpeta de investigación por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, ante la indebida actuación de los policías ministeriales de la Fiscalía Estatal.**

En un mensaje previo el mandatario jalisciense anunció que se retirarán los cargos a los seis jóvenes detenidos el sábado pasado por actos vandálicos en el centro de Guadalajara, para que sean liberados inmediatamente, con el objetivo de dar vuelta a la página.

"Tenemos que dar vuelta a la página, que Jalisco necesita levantar la cabeza, que tenemos que ver hacia adelante. No podemos dejar un cabo suelto porque siguen habiendo muchos intereses que buscan desestabilizar al estado. Necesitamos actuar con sensatez, con responsabilidad. En este momento estoy tomando la decisión de una vez más, y por última vez y por última ocasión, de levantar los cargos contra los seis jóvenes detenidos por hechos cometidos el día sábado, para que puedan quedar de inmediato en libertad... Quiero aclararlo una vez más, no fueron detenidos ni en las manifestaciones del jueves, ni en las del viernes, fueron detenidos en la manifestación del sábado", dijo Alfaro Ramírez.

El mandatario agregó que en Jalisco seguirá imperando la sensatez y la responsabilidad como vía de solución a los problemas y al ambiente de tensión social que han generado quienes quieren desestabilizar a la entidad y recordó que ya se habían retirado los cargos de los detenidos en las manifestaciones del jueves y el viernes.

Alfaro Ramírez agregó que el día de ayer vio imágenes de la Ciudad de México incendiada, con jóvenes usando la violencia con argumentos aún sin entenderse. Por ello, el Gobernador destacó que Jalisco no se convertirá en una celda, pero tampoco se tolerará que se confunda la violencia como una forma de libertad de expresión.

"Tenemos que actuar con sensatez, los policías tienen que actuar con todos los protocolos para garantizar los derechos humanos y para garantizar la libre expresión de las ideas, pero en Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación. En Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro, no podemos tolerar estos actos y no volverá a ver de mi parte una consideración a quienes usen la violencia para manifestar sus ideas", expuso el mandatario.

Asimismo, Enrique Alfaro dijo entender el justo reclamo que existe por parte de las corporaciones policiales por liberar a jóvenes que los han atacado, pero insistió, también los uniformados son gente comprometida que deben de sumarse y pensar en el bien del Estado.

"Esta historia va a terminar cuando los culpables de la muerte de Giovanni paguen las consecuencias de sus actos, y que cuando los policías que levantaron jóvenes de manera indebida, siguiendo instrucciones ajenas a la de la autoridad estatal, paguen también las consecuencias de sus actos. Esa historia no está terminada, pero hoy ya están detenidos los





*presuntos responsables en ambos casos, y vamos a actuar hasta el fondo del asunto, en Jalisco va a haber justicia, no será un historia más de impunidad", afirmó el titular del Ejecutivo estatal.*

Nota periodística:

<https://piedepagina.mx/fgr-atrae-investigacion-sobre-represion-policial-en-jalisco/>

FGR atrae investigación sobre represión policial en Jalisco

11 junio, 2020

La Fiscalía de Jalisco cedió la investigación de los abusos policiales del 5 de junio a la Fiscalía General de la República

Por Dalia Souza /Zona Docs

**El fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, anunció la noche de este miércoles 10 de junio que, el fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, aceptó atraer la carpeta de investigación iniciada por "los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14".**

Organizaciones de la sociedad civil en Jalisco como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y, de manera particular, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, han catalogado que estos hechos no sólo fueron "abusos" sino que se trató de detenciones arbitrarias, incluso delitos graves como desapariciones forzadas.

Estas organizaciones de derechos humanos en Jalisco y redes feministas documentaron que los hechos de violencia y abuso policial perpetrados el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado terminaron en la detención arbitraria, clandestina, ilegal y violenta de más de 80 jóvenes por elementos de seguridad estatal armados y vestidos de civil sin ninguna identificación oficial.

El fiscal señaló que "el día de hoy (miércoles 10 de junio) entre las 2:00 p.m. y 3:00 p.m. el expediente ya fue formal y oficialmente recibido y a partir del día de hoy, la competencia la ejerce exclusivamente la Fiscalía General de la República".

Con ello, expuso que la carpeta de investigación oficiosa que se inició el mismo día para investigar lo acontecido el 5 de junio, fue trasladada a la Fiscalía Anticorrupción del estado de Jalisco "con la finalidad de dar competencia a delitos de carácter estatal".

El fiscal informó, además, que derivado de las presuntas investigaciones iniciadas, hay dos personas detenidas que se encuentran a disposición de un juez. Se trata, según informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, el pasado sábado 6 de junio de los dos "primeros" elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en ser "detenidos por presuntamente violar los derechos humanos de las personas durante las manifestaciones del viernes pasado".

No obstante, como han asegurado las familias de ambos policías (Raúl "N" y Salvador "N") a través de manifestaciones públicas, los agentes de seguridad estatal actuaron por órdenes del fiscal general Gerardo Octavio Solís y de los oficiales al mando.

De esta manera, Solís dijo que ninguna de estas investigaciones es responsabilidad de la Fiscalía del Estado "para garantizar la total y eficaz transparencia en la investigación y asegurar llegar hasta las últimas consecuencias".

Por lo tanto, hay evidencia de que la información sí existe, por lo cual es probable que el sujeto obligado no haya realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, considerando todas las áreas con competencia.

Es por ello que recurro la respuesta para que el sujeto obligado brinde acceso a la totalidad de lo solicitado, pues hay pruebas de que dicha información sí existe y está en su poder.

Por ende, la **FEMDH** en alegatos reiteró lo dicho, adicionando que en fecha 10 de junio de 2020 inició una carpeta de investigación por los hechos suscitados el 5 de junio de 2020, en Guadalajara Jalisco, la cual se integra de forma paralela a la de la Fiscalía de Jalisco.

Al efecto, comunicó que la información solicitada consistente en c) Claves de carpeta de investigación..., d) Cantidad de detenidos" y/o cualquier otra que se encuentre inmersa en la indagatoria que se integra en dicha Fiscalía Especializada, es susceptible de clasificarse como reservada con fundamento en la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP.



## Determinación del Comité de Transparencia:

### ACUERDO CT/ACDO/0018/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **reserva** del expediente de investigación en trámite ante el Ministerio Público de la Federación de la FEMDH, en términos del artículo **110, fracción XII de la LFTAIP**, por un periodo de 5 años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

#### De la Información Reservada

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...  
**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el **artículo 113, fracción XII** de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Es un riesgo real, toda vez, que dar a conocer la información inmersa en indagatorias se expondrían las averiguaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que el otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta



Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo.

- II. Prejuicio que supera el interés público: Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general.

En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.

- III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.





**A.2. Folio de la solicitud 0001701026820**

<b>Síntesis</b>	<b>Sobre personal sustantivo de la institución</b>
<b>Sentido de la resolución</b>	<b>Confirma</b>
<b>Rubro</b>	<b>Información clasificada como reservada</b>

**Contenido de la Solicitud:**

*"El 25 de Junio de 2007 fue anunciado el relevo de 284 mandos de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación.*

*Cuáles mandos de la AFI fueron relevados y quién los relevó? Para cada relevo, incluir el grado/puesto, la oficina/comandancia/comisaría/coordinación sobre la que se ostenta el mando y la fecha del relevo.*

*La información para el relevo de los 34 coordinadores regionales de la Policía Federal Preventiva ya fue entregada por medio de las solicitudes 0002200072107 y 0002200072407. Lo que solicito es la información referente a los relevos de la AFI.*

*Nótese que la Agencia Federal de Investigación fue parte integrante de la Procuraduría General de la República -- hoy Fiscalía General de la República -- durante su existencia. Esto puede verificarse en los artículos 2 y 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicado el miércoles 25 de junio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CMI**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0019/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva, respecto de los nombres de las personas que son o fueron personal sustantivo/operativo de la institución, de conformidad con el **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un



periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

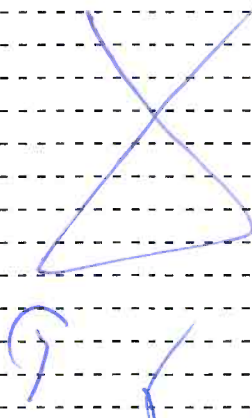
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Divulgar información relacionada con personal sustantivo de la Fiscalía General de la República representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de dicha Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al

A hand-drawn diagram in blue ink. It features a triangle with an 'X' inside it. Below the triangle is a circle with an arrow pointing towards the triangle.



**A.3. Folio de la solicitud 00017001031320**

**Síntesis**

Averiguación previa  
FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017

**Sentido de la resolución**

Confirma

**Rubro**

Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito copia simple, en versión pública de la averiguación previa completa con número FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017 integrada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo5522843&fecha16/05/2018printtrue](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo5522843&fecha16/05/2018printtrue)  
<https://www.gob.mx/sspc/prensa/tarjeta-informativa-241819>" (Sic)

**Determinación del Comité de Transparencia:**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0020/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la **FEMDH** prevista en el **artículo 110, fracciones V, VII y XII** (hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan) así como la **confidencialidad** contemplada en el **artículo 113, fracción I**, de la LFTAIP.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

...  
**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;**

...  
**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**





Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero, Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, será necesario **acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

...

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, **fracción VII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que **obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.**

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. **La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**
- II. **Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**
- III. **Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación** o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

...

**Trigésimo primero.** De conformidad con el **artículo 113, fracción XII** de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

#### **Artículo 110, fracción V:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Por ser la unidad administrativa competente para investigar delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, es que todas las indagatorias que se inician contienen los datos de las víctimas; por lo tanto, entregar la información de su interés se podría hacer reconocibles e identificables a las víctimas, directas o indirectas, así como a los servidores públicos que por razones de su cargo realizan funciones relacionadas con prevención y persecución de los delitos; de tal manera que el riesgo real, demostrable e identificable, es poner en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación directa con la víctima directa, quienes derivado de la comisión de un delito; ahora bien en los expediente se



encuentran datos del personal sustantivo de esa unidad administrativa, así como de personal de otras áreas de esta Institución que coadyuva en la investigación, al ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro los bienes jurídicos, poniendo en riesgo su vida y los derechos de los involucrados.

- II. Superioridad del Interés Público: Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las víctimas indirectas u ofendidos, así como del personal sustantivo de esta institución, puede ser vulnerada; por lo que resulta como prioridad de dicha unidad administrativa salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto, es de especial prevalencia y protección, preponderándolos por encima del interés público, respecto de la información en posesión de los sujetos obligados, es decir, no resulta una consecuencia apegada a los principios de derechos humanos poner en riesgo la vida y la integridad de una persona, para satisfacer el derecho a la información de otra, por tal motivo se deben proteger los datos que contengan algún medio que haga identificable a alguna persona, independientemente de tratarse de víctimas o servidores públicos.
- III. Principio de Proporcionalidad: Se estima que como autoridad es primordial garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger la vida del privada. incluidos en particular la seguridad y confidencialidad proporcionas por las víctimas, así como la información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de las que coadyuve en las funciones encomendadas a las Unidades Especializadas, y que lleve a cabo actividades sustantivas, lo que resulta en la medida y proporcionalidad entre el derecho del acceso a la información y el resguardo de la integridad personal y seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de lo contrario se ponen en riesgo bienes de mayor peso; lo anteriormente manifestado, se funda en lo que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

#### **Artículo 110, fracción VII:**

- I. Riesgo real, demostrable e Identificable: Esta unidad administrativa, en el momento que inicia una indagatoria de hechos posiblemente consecutivos de delito relacionados con actividad periodística, que afecten, coaccionen o limiten el derecho a la libertad de expresión o de imprenta, se avoca a la investigación exhaustiva, actuando siempre bajo la estricta protección a los derechos humanos, por lo que proporcionar algún dato específico, obstaculizarla las acciones implementadas por las autoridades para evitar la comisión de delitos que se pudieran cometer en contra de las víctimas, menoscabando la capacidad de reacción, poniendo en peligro la vida e integridad personal de las víctimas y de los servidores públicos que participan en la Investigación de los hechos, aún más grave es el riesgo real, ya que personas involucradas se convierten en víctimas potenciales, debido a que su integridad física o derechos peligran por la comisión de otro delito, en ese mismo caso se encuentra el personal sustantivo de esta institución, es latente el peligro, en virtud de que se convierten en blancos fáciles de identificar y sufrir algún daño.
- II. Superioridad del Interés Público: El objetivo de esta unidad administrativa es la Procuración de Justicia, lo que deriva en la prevención de delitos, por lo que debe en todo momento resguardar la información que obstaculice o limite el accionar de las autoridades de todos los niveles, es por ello, que el Interés público, supera el interés particular, por lo que todas las actuaciones de carácter estrictamente reservado.





- III. Principio de Proporcionalidad: La Información y documentos, que se encuentran contenidas en las Indagatorias, están bajo el resguardo de los servidores públicos, quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, la investigación, así como la suya, por lo que resulta en la medida y proporcionalidad, que, como servidores públicos a todos niveles, estamos obligados a tener en cuanto a la secrecía de las Investigaciones, con el fin de evitar la comisión de delitos. Lo anteriormente se encuentra fundado y motivado en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 110, fracción XII:**

- I. Riesgo real, demostrable e Identificable: En las indagatorias, se encuentra inmersa Información sensible, por lo tanto haría pública la información que se recopilan en la investigación que lleva acabo los agentes del Ministerio Público de la Federación, para acreditar el delito, la probable responsabilidad de el o los indiciados, la identidad de las víctimas Indirectas u ofendidos, por lo tanto el riesgo real, demostrable e identificable, se encuentra latente quebrantando la seguridad de las víctimas de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
- II. Superioridad del Interés-Público: Contraviene los lineamientos Jurídicos que se han señalado en la presente prueba de daño, máxime que esta institución, tiene como misión preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se considera que proporcionar la información, no garantizaría el interés público, sobre el ejercicio particular de un derecho de acceso a la información, por lo que tornando en consideración que esta institución se debe a la sociedad, está obligada a cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos, sin poner en riesgo de manera alguna el logro de los objetivos que se persiguen con una investigación de carácter penal.
- III. Principio de Proporcionalidad: El reservar la información, no significa un medió restrictivo de acceso a la información, toda vez que la medida y proporcionalidad de la reserva obedece a evitar la victimización secundaria, en la que el estado podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni exponer a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades es pública y susceptible de acceso a particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a Limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, mismo que se actualiza para la presente toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos; por lo que modificar todo ello se hizo con la finalidad de proteger la seguridad del personal sustantivo. así como la prevención de delitos y evitar obstaculizar la impartición de justicia.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que el artículo 113, de la LFTAIP, en la fracción I, señala que *"La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable"* por lo que la información solicitada tiene el carácter de **confidencial** y por lo tanto, no estará sujeta a temporalidad alguna y solo pueden tener acceso a ella los titulares de la



misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, en virtud de que no se cuenta con el consentimiento de las personas para otorgar dicha información.

Ahora bien, para robustecer las citadas pruebas de daño, la mencionada unidad administrativa consideró pertinente citar los siguientes preceptos legales:

### **Código Penal Federal**

#### *Delitos cometidos por los Servidores Públicos*

**Artículo 225.** *Son delitos contra la administración de Justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:*

(...)

**XXVIII** *Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;*

Por otro lado, refirió que tiene la obligación de custodiar y cuidar la documentación e información que tenga conocimiento bajo su responsabilidad, con el fin de evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos, en el presente caso, al estar en etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados, en términos del numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el numeral 63, fracción XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismo que no se contrapone a lo establecido en el artículo 10, fracciones II y V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, ya que ambos preceptos señalan las obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y/o de las y los Fiscales ante las víctimas que cita:

#### **Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República**

**"Artículo 63.-** *Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, y, en lo conducente de los oficiales ministeriales peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:*

(...)

**XII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;**

#### **Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República**

**"Artículo 10.** *Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas En toda investigación y proceso penal las y los Fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tendrá las siguientes obligaciones:*

(...)

**II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores, información**

*sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan;*

**III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o magnético solicitadas por las víctimas y sus representantes, con relación a los, casos, para facilitar su conocimiento y participación en los mismos;**





*V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades públicas o privados que correspondan de conformidad con la presente Ley y demás aplicables:*

Reiteró que es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las Investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión; tomando en consideración que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados Internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos Internacionales de los que México es parte, es por ello que como autoridad estamos obligados a garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas, así como de los servidores públicos que realizan actividades sustantivas en esta Institución.

En ese orden de ideas todas las indagatorias que se inician contienen los datos de las víctimas, lo que puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud, aunado a que como autoridad estamos obligados a garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas y de los servidores públicos, por otra parte, esta Autoridad Federal debe garantizar la reserva y confidencialidad de los datos de las víctimas, tal y como la Ley General de Víctimas en el artículo 40 *"Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptaran con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño..."*.

Para realizar dicho análisis se debe acudir a la Ley General de Víctimas, en el artículo 5 **"Victimización secundaria-** *Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos."* Por lo que esta Autoridad adoptar en todo momento las medidas y procedimientos que garanticen la seguridad y la protección de las personas que hayan estado involucradas en el hecho delictivo, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

Esta teoría sostiene que en materia de protección de víctimas del delito estas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquella o aquellas que hayan estado involucradas en el hecho victimizaste, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización: por lo que, para determinar una reserva, la Información materia de acceso a la información no debe analizarse de manera aislada, puesto que una información aparentemente inofensiva o que se considere Intrascendente puede afectar los derechos humanos de las víctimas del delito, cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto del "mosaico".

De esta manera, es posible en algunos casos no entregar una información solicitada que si bien sea inocua en sí misma, resulte, como se mencionó, sensible para la seguridad y protección de las personas que se encuentren relacionadas dentro de las indagatorias.



tratándose de víctimas y servidores públicos. una vez que es colocada en conjunto con otra información.

Sobre la base de los argumentos expuestos y en relación con los puntos que se enumeran en la solicitud de acceso a la información, el área refirió que en los términos expuestos relativos a la teoría del mosaico, es decir que no puede entregarse información solicitada, ya que su divulgación comprometería la seguridad de las víctimas del delito.

Sirve de apoyo el criterio de la Suprema Corte de la Nación en la Tesis: P. II/2019 (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2021411, 4 de 88, Pleno, Libro 74, Enero de 2020, Tomo. Pág. 561. Tesis Aislada (Constitucional. Administrativa). Publicada el viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

---

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.**

---

*La clasificación de la **información** como **reservada** corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 60. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de **información** confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la **información** y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la **información** y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio."*





**A.4. Folio de la solicitud 0001701031820**

<b>Síntesis</b>	Procedimiento administrativo de remoción VG/PR/184/2011
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Detalle de la solicitud Que fundamentado en el artículo 6 constitucional y lo conducente a mi derecho humano solicito copias autenticadas del **procedimiento administrativo de remoción VG/PR/184/2011** pedimos de este procedimiento de remoción VG/PR/184/2011 copias autenticadas donde señala el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. Fojas 92 a 105. Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima, Fojas 65. Visitador General de la Procuraduría General de la República foja 79 y 80 Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica de Foja 125 a 144 y 155 a 164 Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República Foja 177 a 188 . Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima Foja 148 y 149. Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima foja 146. Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República foja 169 a 171. así como copias autenticadas de las constancias del procedimiento administrativo VG/PR/184/2011, donde se advierte que la Directora General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República VG/PR/184/2011, giró oficios haciéndoles del conocimiento la resolución definitiva donde se decretó la remoción, para los efectos legales conducentes que en el ámbito de su conocimiento correspondieran en (folios 466, 467, 468 y 470)" (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"dirección general de procedimientos de remoción de la visitaduría general de la procuraduría general de la republica hoy FGR" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC y FEAI.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0021/2021:**



En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencial del expediente **VG/PR/184/2011** en razón de que los nombres del personal sustantivo de esta institución (Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos) involucrados en los expedientes de procedimientos de remoción; así como la información de las averiguaciones previas que se encuentra inmersa en los citados expedientes; se considera como información reservada en términos de las **fracciones V y VII (hasta por un periodo de cinco años) del artículo 110** de la LFTAIP; asimismo, los datos personales concernientes a una persona física identificada, se consideran como información clasificada como confidencial en términos de la **fracción I del artículo 113** de la LFTAIP, a decir:

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

- “  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**  
“  
**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;”**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero y Vigésimo Sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**  
**II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**  
**III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**





Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública. Difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo su vida, la función y actuación que desempeñaron dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones respecto de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que emanaron del ejercicio de sus atribuciones.
  - II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se identifique a personal que revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, aunado al hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con ex servidores públicos de la Institución, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que los Ministerios Públicos de la Federación cumplieron con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información petitionada se encuentra ajustada a derecho.
  - III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar información relativa a datos de funcionarios que pudieran ser de carácter sustantivo en la Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
- En conclusión, por lo que se refiere a la fracción V del artículo 110 de la LFTAIP, se estima que el divulgar la información que contienen los expedientes antes citados, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública; ya que difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo la vida de dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para la investigación y acreditación de diversos ilícitos; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y



persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que realizaron durante el ejercicio de sus atribuciones.

Aunado al hecho, que permitir que se identifique a personal que en su momento revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, así como que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dichos ex servidores públicos, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública y procuración de justicia, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que este Ministerio Público de la Federación en su momento cumplió con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información peticionada se encuentra ajustada a derecho.

#### **Artículo 110, fracción VII:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** El proporcionar la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la procuración de justicia. Lo anterior, en razón de que la información que se solicita contiene diversa relativa al contenido de averiguaciones previas, que difundir la misma, pone en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer a personas que podrían estar involucradas con la delincuencia organizada la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se obstruye la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas.
- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se conozca el contenido de las averiguaciones previas, es decir la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación se pone en riesgo la prevención de los delitos, así como dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, supone un riesgo para la eficacia de las tareas de persecución de los delitos, así como en su caso la sanción de las personas presuntamente responsables por la comisión de conductas ilícitas. En este sentido, el riesgo de obstruir la prevención y persecución de los delitos resulta mayor al interés público general de conocer dicha información, lo anterior se encuentra justificado en términos del artículo 21 de la Constitución en el caso de la persecución de los delitos.
- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar la información relativa al contenido de las averiguaciones previas no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información se pondría en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se pondría en riesgo la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, por lo





tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Asimismo, la reserva del pronunciamiento sobre la reserva de la información requerida por el solicitante es acorde con el principio de proporcionalidad estricta en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer la información que se encuentra inmersa en los procedimientos de remoción, en esa misma medida se satisface el interés general de no obstruir las tareas de prevención y persecución de los delitos, y la sanción de conductas ilícitas.

Por último, vale la pena señalar que la restricción que se impone a la información solicitada no solo es legal al encontrarse prevista por el artículo 110 fracción VII de la **LFTAIP**, sino también es legítima, al considerarse la sanción de conductas ilícitas como una necesidad social imperiosa por el máximo ordenamiento de los Estados Unidos mexicanos.

Entonces, clasificar la información como reservada conlleva una afectación mínima al principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información solicitada, en virtud de que este hecho se realiza para proteger la investigación y persecución de conductas ilícitas

Asimismo, se advierte que la información solicitada contiene datos personales de personas físicas, es decir, datos clasificados como información confidencial. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción I de la **LFTAIP**, que indica:

**Artículo 113.** Se considera **información confidencial**:

I. La que contiene **datos personales** concernientes a una **persona física identificada** o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

También, se precisa que los Lineamientos Generales, disponen lo siguiente:

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

...

Por lo anterior, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



**A.5. Folio de la solicitud 0001701031920**

**Síntesis**

Procedimiento administrativo de remoción en el  
Órgano Interno de Control

**Sentido de la resolución**

Confirma

**Rubro**

Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Por el derecho a la información que nos asiste y que están consagrados en nuestra constitución política solicitamos a usted copias autenticadas de todas y cada una de las resoluciones emitidas y ejecutadas en los diversos procedimientos administrativos de remoción en los cuales fue sancionado y removido de su cargo como agente del ministerio publico de la federación el servidor publico Carlos Cesar Farías Ramos." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"dirección GENERAL de **procedimientos de remoción VG/PR/050/2014 Y VARIOS MAS**" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC y FEAI**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0022/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencial de los expedientes localizados por el OIC en razón de que los nombres del personal sustantivo de esta institución (Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos) involucrados en los expedientes de procedimientos de remoción; así como la información de las averiguaciones previas que se encuentra inmersa en los citados expedientes; se considera como información reservada en términos de las **fracciones V y VII (hasta por un periodo de cinco años) del artículo 110** de la LFTAIP; asimismo, los datos personales concernientes a una persona física identificada, se consideran como información clasificada





como confidencial en términos de la **fracción I del artículo 113** de la **LFTAIP**, a decir:

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

...  
**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero y Vigésimo Sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

**I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**

**II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**

**III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública. Difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo su vida, la función y actuación que desempeñaron dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que



realizaron para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones respecto de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que emanaron del ejercicio de sus atribuciones.

- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se identifique a personal que revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, aunado al hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con ex servidores públicos de la Institución, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que los Ministerios Públicos de la Federación cumplieron con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información peticionada se encuentra ajustada a derecho.

- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar información relativa a datos de funcionarios que pudieran ser de carácter sustantivo en la Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En conclusión, por lo que se refiere a la fracción V del artículo 110 de la **LFTAIP**, se estima que el divulgar la información que contienen los expedientes antes citados, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública; ya que difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo la vida de dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para la investigación y acreditación de diversos ilícitos; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que realizaron durante el ejercicio de sus atribuciones.

Aunado al hecho, que permitir que se identifique a personal que en su momento revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, así como que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dichos ex servidores públicos, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública y procuración de justicia, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que este Ministerio Público de la Federación en su momento cumplió con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información peticionada se encuentra ajustada a derecho.

**Artículo 110, fracción VII:**



- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** El proporcionar la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la procuración de justicia. Lo anterior, en razón de que la información que se solicita contiene diversa relativa al contenido de averiguaciones previas, que difundir la misma, pone en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer a personas que podrían estar involucradas con la delincuencia organizada la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se obstruye la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas.
- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se conozca el contenido de las averiguaciones previas, es decir la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación se pone en riesgo la prevención de los delitos, así como dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, supone un riesgo para la eficacia de las tareas de persecución de los delitos, así como en su caso la sanción de las personas presuntamente responsables por la comisión de conductas ilícitas. En este sentido, el riesgo de obstruir la prevención y persecución de los delitos resulta mayor al interés público general de conocer dicha información, lo anterior se encuentra justificado en términos del artículo 21 de la Constitución en el caso de la persecución de los delitos.
- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar la información relativa al contenido de las averiguaciones previas no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información se pondría en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se pondría en riesgo la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Asimismo, la reserva del pronunciamiento sobre la reserva de la información requerida por el solicitante es acorde con el principio de proporcionalidad estricta en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer la información que se encuentra inmersa en los procedimientos de remoción, en esa misma medida se satisface el interés general de no obstruir las tareas de prevención y persecución de los delitos, y la sanción de conductas ilícitas.

Por último, vale la pena señalar que la restricción que se impone a la información solicitada no solo es legal al encontrarse prevista por el artículo 110 fracción VII de la **LFTAIP**, sino también es legítima, al considerarse la sanción de conductas ilícitas como una necesidad social imperiosa por el máximo ordenamiento de los Estados Unidos Mexicanos.

Entonces, clasificar la información como reservada conlleva una afectación mínima al principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información





solicitada, en virtud de que este hecho se realiza para proteger la investigación y persecución de conductas ilícitas

Asimismo, se advierte que la información solicitada contiene datos personales de personas físicas, es decir, datos clasificados como información confidencial. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción I de la **LFTAIP**, que indica:

**Artículo 113.** Se considera **información confidencial**:

I. La que contiene **datos personales** concernientes a una **persona física identificada** o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

También, se precisa que los Lineamientos Generales, disponen lo siguiente:

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

...

Por lo anterior, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



**A.6. Folio de la solicitud 0001701032020**

<b>Síntesis</b>	Procedimiento administrativo de remoción VG/PR/184/2011
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"por el derecho que nos asiste del acceso al información consagrado en nuestra carta magna solicitamos copias autenticadas de las constancias del **procedimiento administrativo de remoción VG/PR/184/2011**, donde se advierte que la Directora General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República VG/PR/184/2011 emitieron una resolución administrativa por lo que también solicitamos copias autenticadas de la resolución y su ejecución." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"Directora General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República VG/PR/184/2011" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC y FEAI**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0023/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencial del expediente **VG/PR/184/2011** en razón de que los nombres del personal sustantivo de esta institución (Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos) involucrados en los expedientes de procedimientos de remoción; así como la información de las averiguaciones previas que se encuentra inmersa en los citados expedientes; se considera como información reservada en términos de las **fracciones V y VII (hasta por un periodo de cinco años) del artículo 110** de la LFTAIP; asimismo, los



datos personales concernientes a una persona física identificada, se consideran como información clasificada como confidencial en términos de la **fracción I del artículo 113** de la LFTAIP, a decir:

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

...  
**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"**

~~Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero y Vigésimo Sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:~~

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, ~~aquella que obstruya la prevención de delitos al~~ obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

**I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**

**II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**

**III. Que la difusión de la información pueda impedir u **obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público** o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública. Difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone





en riesgo su vida, la función y actuación que desempeñaron dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones respecto de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que emanaron del ejercicio de sus atribuciones.

- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se identifique a personal que revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, aunado al hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con ex servidores públicos de la Institución, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que los Ministerios Públicos de la Federación cumplieron con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información petitionada se encuentra ajustada a derecho.

- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar información relativa a datos de funcionarios que pudieran ser de carácter sustantivo en la Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En conclusión, por lo que se refiere a la fracción V del artículo 110 de la **LFTAIP**, se estima que el divulgar la información que contienen los expedientes antes citados, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública; ya que difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo la vida de dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para la investigación y acreditación de diversos ilícitos; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que realizaron durante el ejercicio de sus atribuciones.

Aunado al hecho, que permitir que se identifique a personal que en su momento revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, así como que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dichos ex servidores públicos, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública y procuración de justicia, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que este Ministerio Público de la Federación en su momento cumplió con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información petitionada se encuentra ajustada a derecho.



**Artículo 110, fracción VII:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** El proporcionar la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la procuración de justicia. Lo anterior, en razón de que la información que se solicita contiene diversa relativa al contenido de averiguaciones previas, que difundir la misma, pone en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer a personas que podrían estar involucradas con la delincuencia organizada la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se obstruye la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas.
- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se conozca el contenido de las averiguaciones previas, es decir la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación se pone en riesgo la prevención de los delitos, así como dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, supone un riesgo para la eficacia de las tareas de persecución de los delitos, así como en su caso la sanción de las personas presuntamente responsables por la comisión de conductas ilícitas. En este sentido, el riesgo de obstruir la prevención y persecución de los delitos resulta mayor al interés público general de conocer dicha información, lo anterior se encuentra justificado en términos del artículo 21 de la Constitución en el caso de la persecución de los delitos.
- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar la información relativa al contenido de las averiguaciones previas no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información se pondría en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se pondría en riesgo la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Asimismo, la reserva del pronunciamiento sobre la reserva de la información requerida por el solicitante es acorde con el principio de proporcionalidad estricta en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer la información que se encuentra inmersa en los procedimientos de remoción, en esa misma medida se satisface el interés general de no obstruir las tareas de prevención y persecución de los delitos, y la sanción de conductas ilícitas.

Por último, vale la pena señalar que la restricción que se impone a la información solicitada no solo es legal al encontrarse prevista por el artículo 110 fracción VII de la **LFTAIP**, sino también es legítima, al considerarse la sanción de conductas ilícitas como una necesidad social imperiosa por el máximo ordenamiento de los Estados Unidos mexicanos.



Entonces, clasificar la información como reservada conlleva una afectación mínima al principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información solicitada, en virtud de que este hecho se realiza para proteger la investigación y persecución de conductas ilícitas

Asimismo, se advierte que la información solicitada contiene datos personales de personas físicas, es decir, datos clasificados como información confidencial. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción I de la **LFTAIP**, que indica:

**Artículo 113.** Se considera **información confidencial**:

I. La que contiene **datos personales** concernientes a una **persona física identificada o identificable**;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

También, se precisa que los Lineamientos Generales, disponen lo siguiente:

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

...

Por lo anterior, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.





A.7. Folio de la solicitud 0001701032220

Síntesis	Procedimiento administrativo de remoción VG/PR/184/2011, VG/PR/050/2014 y más
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

"Por el derecho a la información que nos asiste y nos otorga nuestra carta magna solicitamos copias autenticadas de todos y cada una de las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativo de remoción en los que haya sido sancionado el C. Carlos Cesar Farias Ramos así como la resolución de su inhabilitación y el tiempo por el cual fue inhabilitado." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"Directora General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República solicitamos a usted saber si los removidos en los siguientes procedimientos VG/PR/184/2011 , VG/PR/050/2014 y de contar con mas Procedimientos de Remoción" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC y FEAI.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0024/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencial de los expedientes localizados en el OIC, en razón de que los nombres del personal sustantivo de esta institución (Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos) involucrados en los expedientes de procedimientos de remoción; así como la información de las averiguaciones previas que se encuentra inmersa en los citados expedientes; se considera como información reservada en términos de las **fracciones V y VII (hasta por un periodo de cinco años) del artículo 110** de la LFTAIP; asimismo, los



datos personales concernientes a una persona física identificada, se consideran como información clasificada como confidencial en términos de la **fracción I del artículo 113** de la **LFTAIP**, a decir:

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

“**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

“**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;**”

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero y Vigésimo Sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública. Difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone



en riesgo su vida, la función y actuación que desempeñaron dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para investigar y acreditar diversos ilícitos, así como las actuaciones respecto de las personas y organizaciones dedicadas a la delincuencia; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que emanaron del ejercicio de sus atribuciones.

- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se identifique a personal que revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, aunado al hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con ex servidores públicos de la Institución, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que los Ministerios Públicos de la Federación cumplieron con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información peticionada se encuentra ajustada a derecho.

- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar información relativa a datos de funcionarios que pudieran ser de carácter sustantivo en la Institución no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información los haría identificables poniendo en inminente riesgo la vida y la integridad tanto de ellos como de sus familiares, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

En conclusión, por lo que se refiere a la fracción V del artículo 110 de la **LFTAIP**, se estima que el divulgar la información que contienen los expedientes antes citados, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública; ya que difundir información relativa a ex servidores públicos que desempeñaron tareas de carácter sustantivo, pone en riesgo la vida de dichos ex funcionarios (y sus familiares) al hacerlos identificables, tomando en consideración el tipo de funciones que realizaron para la investigación y acreditación de diversos ilícitos; además de perjudicar las funciones que desempeñaron con motivo de la investigación y persecución de conductas irregulares y/o ilícitas que realizaron durante el ejercicio de sus atribuciones.

Aunado al hecho, que permitir que se identifique a personal que en su momento revistió la categoría de sustantivo, es decir, con funciones de investigación, se pondría en riesgo su vida, salud, seguridad e integridad física, así como que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dichos ex servidores públicos, lo que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública y procuración de justicia, vulnerando el interés social y en general, ya que el beneficio de revelar la información solicitada se limitaría única y exclusivamente a su ejercicio de derecho de acceso a la información, cuando en este caso, lo que debe prevalecer es el interés público, por lo que tomando en consideración que este Ministerio Público de la Federación en su momento cumplió con la sociedad a través de su función neurálgica de investigación y persecución de delitos, la reserva de la información peticionada se encuentra ajustada a derecho.





**Artículo 110, fracción VII:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.** El proporcionar la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la procuración de justicia. Lo anterior, en razón de que la información que se solicita contiene diversa relativa al contenido de averiguaciones previas, que difundir la misma, pone en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer a personas que podrían estar involucradas con la delincuencia organizada la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se obstruye la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas.
- II. **Perjuicio que supera el interés público.** Al permitir que se conozca el contenido de las averiguaciones previas, es decir la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación se pone en riesgo la prevención de los delitos, así como dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, supone un riesgo para la eficacia de las tareas de persecución de los delitos, así como en su caso la sanción de las personas presuntamente responsables por la comisión de conductas ilícitas. En este sentido, el riesgo de obstruir la prevención y persecución de los delitos resulta mayor al interés público general de conocer dicha información, lo anterior se encuentra justificado en términos del artículo 21 de la Constitución en el caso de la persecución de los delitos.
- III. **Principio de proporcionalidad.** El reservar la información relativa al contenido de las averiguaciones previas no es un medio restrictivo de acceso a la información, ya que de entregar dicha información se pondría en riesgo la prevención de los delitos al dar a conocer la metodología para investigar y acreditar diversos ilícitos por parte de la autoridad responsable de su investigación, así como se pondría en riesgo la persecución de los delitos al dar a conocer los elementos probatorios de las conductas ilícitas y las actuaciones respecto de las personas involucradas en las averiguaciones previas, por lo tanto, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Asimismo, la reserva del pronunciamiento sobre la reserva de la información requerida por el solicitante es acorde con el principio de proporcionalidad estricta en virtud de que en la medida en que se restringe el derecho a conocer la información que se encuentra inmersa en los procedimientos de remoción, en esa misma medida se satisface el interés general de no obstruir las tareas de prevención y persecución de los delitos, y la sanción de conductas ilícitas.

Por último, vale la pena señalar que la restricción que se impone a la información solicitada no solo es legal al encontrarse prevista por el artículo 110 fracción VII de la **LFTAIP**, sino también es legítima, al considerarse la sanción de conductas ilícitas como una necesidad social imperiosa por el máximo ordenamiento de los Estados Unidos Mexicanos.



Entonces, clasificar la información como reservada conlleva una afectación mínima al principio de transparencia y publicidad, ya que no es posible entregar la información solicitada, en virtud de que este hecho se realiza para proteger la investigación y persecución de conductas ilícitas

Asimismo, se advierte que la información solicitada contiene datos personales de personas físicas, es decir, datos clasificados como información confidencial. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción I de la **LFTAIP**, que indica:

**Artículo 113.** Se considera **información confidencial**:

I. La que contiene **datos personales** concernientes a una **persona física identificada** o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

También, se precisa que los Lineamientos Generales, disponen lo siguiente:

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

...

Por lo anterior, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



**A.8. Folio de la solicitud 0001701035520**

<b>Síntesis</b>	Información relacionada con posible personal sustantivo y estado de fuerza de la institución
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

**"ANTONIO MÉNDEZ CRUZ**

*"...Se gire atento requerimiento al **Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas**, para que informe y soporte con copias certificadas de las actas circunstanciadas de las constancias correspondiente, lo siguiente:*

*1. Se me informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, respecto del número y que personal de la Policía Federal Ministerial, se encontraban adscritos a la Subsede de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que asistieron a laborar del 15 de marzo al 20 de abril de 2018.*

*2. Se me informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, respecto del número y que personal de la Policía Federal Ministerial, que se encontraban adscritos a la Subsede de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del periodo comprendido del 15 de marzo al 20 de abril de 2018.*

*4. Se me expida copia certificada del Libro de la Bitácora de Guardia de la Oficina de la Policía Federal Ministerial, Subsede de Nuevo Laredo, Tamaulipas, correspondiente a los días del 15 de marzo al 20 de abril de 2018*

*5. Informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, el número de Carpetas de Investigación asignadas al suscrito ANTONIO MÉNDEZ CRUZ, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del mes de enero de 2018 al mes de abril de 2018.*

*6. Informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, el número de Oficios de traslados de indicios o material probatorio realizados, asignados o en apoyo por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, de Nuevo Laredo a la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.*

*7. Informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, el número de traslados efectuados para el egreso de personas internas en el Centro de ejecuciones de Sanciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas realizados, asignados o en apoyo por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.*





8. Informe y acredite con la documentación en copia certifica correspondiente, el número de traslados efectuados para el egreso de personas internas en el Centro de Ejecuciones de Sanciones a la Sala de Audiencia del Sistema de Justicia Penal, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizados, asignados o en apoyo al suscrito ANTONIO MÉNDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

9. Informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente el número de deportaciones de personal de los Estados Unidos de América, hacia el territorio mexicano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizados, asignados o en apoyo, por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

10. Informe y acredite con la documentación en copia certificada, correspondiente, el número de incineraciones de estupefacientes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizados, asignados o en apoyo, por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

11. Informe y acredite con la documentación en copia certificada correspondiente, el número de apoyo de diligencias de campo con Juzgados realizados, asignados o en apoyo, por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, en Nuevo Laredo Tamaulipas, del periodo comprendido del 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

12. Informe y acredite con la documentación certificada correspondiente, el número de apoyo de diligencias de campo con Agente del Ministerio Público de la Federación, realizados, asignados o en apoyo, por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

13. Informe y acredite con la documentación certificada correspondiente, el número de apoyo de diligencias de campo con Agente del Ministerio Público de la Federación, realizados, asignados o en apoyo, por el suscrito ANTONIO MENDEZ CRUZ, del periodo comprendido del día 15 de marzo al 20 de abril de 2018.

14. Informe y acredite con la documentación certificada correspondiente, el número de comparecencias del personal de la Policía Federal Ministerial; Subsede Nuevo Laredo, Tamaulipas, del periodo del 15 de marzo al 20 de abril de 2018

15. Informe y acredite con la documentación certificada correspondiente, el número de licencias médicas otorgadas y tramitadas por el personal de la Policía Federal Ministerial, Subsede Nuevo Laredo, Tamaulipas." (Sic)

#### **Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG y CMI.**

#### **ACUERDO CT/ACDO/0025/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por



unanimidad determina en un primer momento, clasificar la reserva respecto de afirmar o negar que la persona señalada en la solicitud sea o no personal sustantivo, en términos del **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, toda vez que con su simple identificación se pondría en riesgo su vida, seguridad y salud, a decir:

**ARTÍCULO 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**  
...

Aunado a lo anterior, se precisa que el Vigésimo Tercero de los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, dispone:

VIGÉSIMO TERCERO. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

En este contexto, es dable señalar que la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, prevé:

*ARTÍCULO 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

*ARTÍCULO 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

*I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

*II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*

*III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

*ARTÍCULO 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

*La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.*



Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Divulgar información relacionada con personal sustantivo de la Fiscalía General de la República representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de dicha Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Lo anterior, se robustece en que el propio INAI, en la resolución al recurso de revisión RRA 5175/18, determinó que se debe clasificar como reservado cualquier dato que asevere que una persona es personal de carácter sustantivo, como se observa a continuación:

"...resulta procedente MODIFICAR la respuesta de la Procuraduría General de la República, e instruye al sujeto obligado, en los siguientes términos:

1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 fracción II de la Ley de la Materia, su Comité de Transparencia emita una nueva resolución en la que **clasifique como reservado el pronunciamiento respecto de cualquier dato que asevere que la persona del especial interés del solicitante, es personal de carácter operativo del sujeto obligado, (identificada por la peticionaria como Agente del Ministerio Público)** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

...."





Ahora bien, en caso de que el particular acredite su personalidad, este Órgano Colegiado para los puntos **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, confirme** la declaratoria de **inexistencia** de las documentales requeridas, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en virtud de que los Agentes de la Policía Federal Ministerial, son quienes resguardan la información concerniente a los mandamientos que se les asignan para su debido cumplimiento, por lo que no se cuenta con una estadística de productividad del personal integrante de la Unidad Administrativa.

**ACUERDO**  
**CT/ACDO/0026/2021:**

Finalmente, este Comité de Transparencia respecto del punto consistente en número y que personal de la Policía Federal Ministerial, se encontraban adscritos a la Subse de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que asistieron a laborar del 15 de marzo al 20 de abril de 2018, así como, copia certificada del Libro de la Bitácora de Guardia de la Oficina de la Policía Federal Ministerial, Subse de Nuevo Laredo, Tamaulipas, confirma la clasificación de reserva de los datos requeridos, en términos del **artículo 110, fracción I** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan, ello por tratarse del estado de fuerza de la institución.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...  
**I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Décimo Séptimo y Décimo Octavo** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Décimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:

...  
**IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades** de inteligencia o contrainteligencia y **cuando se revelen** normas, procedimientos, **métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo** que sean útiles para la generación de inteligencia **para la seguridad** nacional;

**VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;**

**VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada,** la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

**VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura** de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de



cualquier tipo de infraestructura **que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;**

Asimismo, podrá considerarse como reservada **aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción** de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, **especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles** a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignan.

**Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información **reservada, aquella que comprometa la seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información **pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad** de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada **aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública**, sus planes, estrategias, **tecnología, información, sistemas de comunicaciones.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

#### **Artículo 110, fracción I:**

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** El riesgo por divulgar información relacionada con el Estado de Fuerza de la Policía Federal Ministerial, causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de esta Institución encargada de la Seguridad Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de conocer información sobre el número de agentes, lo cual es propio de dar a conocer el Estado de Fuerza de la Policía Federal Ministerial.
- III. **Principio de proporcionalidad:** La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la







**A.9. Folio de la solicitud 0001701039420**

**Síntesis**

Posibles líneas de investigación en contra de servidores y exservidores públicos

**Sentido de la resolución**

Confirma

**Rubro**

Información clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

"Tomando como antecedente las resoluciones del INAI (antes IFAI) respecto de la publicidad de información relacionada con averiguaciones previas registradas en los expedientes 4470/08, 2333/07, 5984/11 y la 1297/13, solicito saber si los siguientes servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que han ostentado cargos de importancia como lo son los de jueces y magistrados, cuentan con denuncias ante la Fiscalía General de la República o si están inmersos en alguna averiguación previa o carpeta de investigación.

Aunque la solicitud de información plantea un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la vida privada y el honor del servidor, debe considerarse divulgar la información porque se trata de servidores públicos que deben soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad, a diferencia de las personas privadas o simples particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad a recibir información sobre ese personaje público ante las tareas que desempeña.

Además, el CJF en respuesta a la solicitud de información 032000086219 me brindó el nombre de los mencionados jueces y magistrados que han sido destituidos tras haberseles seguido un procedimiento administrativo donde se comprobó que incurrieron en violaciones a la ley.

Quiero mencionar que un precedente en el tema lo marca el recurso de revisión 1297/13, donde el pleno del entonces IFAI instruyó a la PGR para que entregara versión pública de la impresión de pantalla del SIIE en la que se debería testar cualquier dato de identificación de la AP, a excepción del nombre del exservidor público en cuestión.

Los jueces y magistrados de los que deseo saber dicha información son:

María Esther Rodríguez Juárez  
CARLOS HUGO DE LEON RODRÍGUEZ  
DANIEL BASTIDA MEDINA  
CARLOS GREGORIO ORTIZ GARCIA  
DANIEL HERIBERTO NUÑEZ JUAREZ  
JUAN RAMÍREZ DÍAZ  
JOSE SUSANO LUCIO LUCIO  
FELIPE V CONSUELO SOTO  
ALVARO CARRILLO CORTES  
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LUIS  
JAVIER AVILES BELTRAN  
RAMON ARTURO ESCOBEDO RAMIREZ



LUIS ALBERTO RAZO GARCÍA  
EFRAIN CAZARES LOPEZ  
ARTURO FONSECA MENDOZA  
LUIS ARMANDO JEREZANO TREVIÑO  
FRANCISCO MARTÍN HERNÁNDEZ ZARAGOZA  
JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA  
FRANCISCO RAMOS SILVA  
JOSE NEALS ANDRE NALDA  
GUADALUPE LUNA ALTAMIRANO  
Luis Alberto Ibarra Navarrete  
Jorge Carenzo Rivas  
Enrique González Meyenberg  
NICANDRO MARTÍNEZ LOPEZ  
ROBERTO TERRAZAS SALGADO  
RAUL MELGOZA FIGUEROA  
AGUSTIN CERON FLORES  
CARLOS ARTURO LAZALDE MONTOYA  
HECTOR GALVEZ TANCHEZ  
JOSÉ TRINIDAD JIMÉNEZ ROMO  
FRANCISCO SALVADOR PÉREZ  
RAFAEL ZAMUDIO ARIAS  
FERNANDO LÓPEZ MURILLO  
Eduardo Ochoa Torres,  
José Manuel Rodríguez Puerto  
Jorge Figueroa Cacho" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, CPA, FECC y UTAG.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0027/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **confidencialidad** del pronunciamiento institucional en general, en razón que afirmar o negar alguna **indagatoria, imputación, procedimiento, sanción o investigación** en contra de una persona física identificada o identificable, **se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la misma**, en términos del **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.



Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable, divulgar el nombre o nombres de las personas que han sido sujetas a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.





Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que*



tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de



la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

#### **ACUERDO**

**CT/ACDO/0028/2021:**

Por otro lado, este Órgano Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de **reserva** del pronunciamiento institucional respecto a divulgar cualquier dato que dé cuenta que se realice alguna investigación en contra de las personas físicas referidas y, por ende, se afirme o niegue que estas sean jueces y/o magistrados, poniendo en riesgo su vida, su seguridad, o salud, e incluso de sus familiares, en términos del **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Por ello, se trae a colación el citado precepto legal, que cita:





**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

V. Pueda **poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física**;

Lo anterior se relaciona con lo establecido en el Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el cual establece lo siguiente:

**Vigésimo Tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad **o salud**.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Riesgo real, identificable y demostrable. El divulgar información que dé cuenta que las personas referidas en la solicitud cuentan con una investigación como servidores públicos, esto es, que tengan como objeto acreditar que éstos son jueces y/o magistrados, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón que, al hacer identificables a dichas personas con un cargo jurisdiccional, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de éstas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo a las mismas.

- II. Superioridad de interés público. Al permitir que se identifique a las personas mencionadas en la solicitud con algún cargo de carácter jurisdiccional, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa, hecho que se traduciría en un detrimento al bien jurídico tutelado por la causal invocada, siendo este la vida, la seguridad o salud de una persona, e inclusive, de sus familiares, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso prevalecería el interés particular sobre el interés público, además que permitiría dar a conocer insumos que permitirían facilitar a los miembros de la delincuencia organizada para atentar contra las personas la mencionadas en la solicitud.



- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.



A.10. Folio de la solicitud 0001700001221

Síntesis

Averiguación previa 2  
19/APDGDCSPI/2015

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Con forme al derecho a la información que nos asiste consagrada en nuestra constitución solicitamos copias autenticadas de la averiguación previa 219/APDGDCSPI/2015, la cual se encuentra localizable en la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XIII-DGDCSPI (Mesa Trece Dirección de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución), en la ciudad de México" (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"averiguación previa 219/APDGDCSPI/2015, que se pueden localizar en la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XIII-DGDCSPI (Mesa Trece Dirección de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución), en la ciudad de México" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: FEAI.

ACUERDO  
CT/ACDO/0029/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **reserva** del expediente de investigación en trámite ante el Ministerio Público de la Federación, en términos del artículo **110, fracción XII de la LFTAIP**, por un periodo de cuatro años, ocho meses.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:



**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

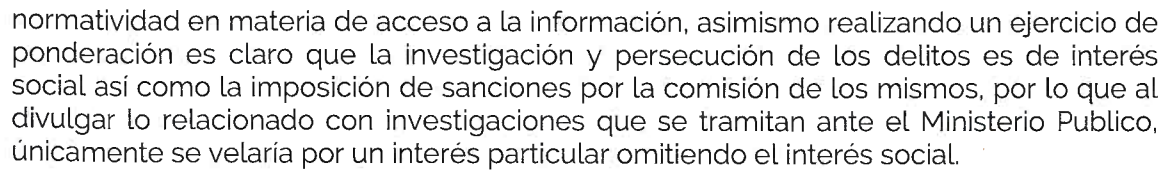
**Trigésimo primero.** De conformidad con el **artículo 113, fracción XII** de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Es un riesgo real, toda vez, que dar a conocer la información inmersa en indagatorias se expondrían las averiguaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que el otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo.
- II. **Prejuicio que supera el interés público:** Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general.

En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.

- III. **Principio de proporcionalidad:** El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la





**A.11. Folio de la solicitud 0001700001321**

<b>Síntesis</b>	Averiguación previa 219/APDGDCSPI/2015
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información clasificada como reservada

**Contenido de la Solicitud:**

*"Con forme al derecho a la información que nos asiste consagrada en nuestra constitución solicitamos copias autenticadas de la averiguación previa 219/APDGDCSPI/2015, la cual se encuentra localizable en la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XIII-DGDCSPI (Mesa Trece Dirección de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución), en la ciudad de México" (Sic)*

**Otros datos para facilitar su localización:**

*"averiguación previa 219/APDGDCSPI/2015, que se pueden localizar en la Agencia del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XIII-DGDCSPI (Mesa Trece Dirección de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución), en la ciudad de México" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEAI**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0030/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **reserva** del expediente de investigación en trámite ante el Ministerio Público de la Federación, en términos del artículo **110, fracción XII de la LFTAIP**, por un periodo de cuatro años, ocho meses.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**





**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Es un riesgo real, toda vez, que dar a conocer la información inmersa en indagatorias se expondrían las averiguaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que el otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo.
- II. **Prejuicio que supera el interés público:** Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general.

En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.

- III. **Principio de proporcionalidad:** El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la



normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la documentación requerida:**

**B.1. Folio de la solicitud 0001701026120**

[Redacted]	
Síntesis	Expediente vinculado al hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en abril del 2011.
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información parcialmente clasificada como reservada y confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito copia de todos los documentos (incluyendo fotografías, audios, videos, mapas, autopsias, planos, e información en otros formatos físicos y digitales) que integren la averiguación previa, carpeta de investigación o como se denomine a los documentos y expedientes que la FGR resguarde en sus archivos relativos a las averiguaciones sobre todas las fosas clandestinas y 193 cuerpos encontrados en San Fernando, Tamaulipas, en abril del 2011.." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH**.

**Análisis a la solicitud:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la LFTAIP, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa que pudiera contar con lo petitionado, misma que posterior a realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta, encontró el registro de una indagatoria la cual se encuentra en proceso de sustanciación, por ello, **en un primer momento** al encontrarse **en trámite** actualiza la hipótesis de información clasificada como reservada contemplada en la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP y Trigésimo Primero de los *Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas* (Lineamientos Generales), en relación con el entonces vigente y aplicable artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales* (CFPP).

Ahora bien, posterior al análisis a la indagatoria en comento, se logra advertir que se encuentra relacionada con violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con lo estipulado por la **"RECOMENDACIÓN No. 80/2013 CASO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA DE 72 PERSONAS MIGRANTES Y ATENTADOS A LA VIDA DE LOS EXTRANJEROS V73 Y V74, EN EL MUNICIPIO DE**





SAN FERNANDO, TAMAULIPAS<sup>2</sup>, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); actualizando para tal efecto la hipótesis de excepción a la clasificación de reserva invocada en el párrafo inmediato anterior, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que para su mejor observancia se ilustra a continuación:

**"Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos** o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

(...)."

(Énfasis añadido).

En dichas consideraciones, esta Fiscalía General de la República, en apego irrestricto a la normativa jurídica aplicable en materia de transparencia, pone a disposición en versión pública la indagatoria señalada, constante de 268 tomos integrado por un total de 174,677 fojas: así como 15 tomos de anexos integrados por 8609 fojas de anexos. Sin embargo, para su entrega es necesaria la elaboración de una versión pública, ya que contiene datos que actualizan los supuestos de clasificación de reserva y confidencialidad que se citan más adelante, por tanto, ésta podrá ser **elaborada previo pago de los costos de reproducción correspondientes**, en su caso.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los **artículos 108, 136 138 y 139** de la LFTAIP, al **Quincuagésimo Sexto** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), y al **Criterio 08/17** del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra indican:

**Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales**, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, **deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas**, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

**Artículo 136.** El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. **Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.**  
**En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.**

**Artículo 138. La información deberá entregarse siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de las cuotas de reproducción correspondientes.**

**Artículo 139.** La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, **contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.**

<sup>2</sup> RECOMENDACIÓN No. 80/2013 CASO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA DE 72 PERSONAS MIGRANTES Y ATENTADOS A LA VIDA DE LOS EXTRANJEROS V73 Y V74, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, Disponible en: [http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec\\_2013\\_080.pdf](http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf)



Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

**Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas**

**Quincuagésimo sexto.** La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y **deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia**, el cual señala que la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas, será elaborada por los sujetos obligados previo pago de los costos de reproducción.

**Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante.** De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate**, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

**Determinación del Comité de Transparencia:**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0031/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación y resguardo de los siguientes datos contenidos en el documento requerido:

- ♦ la clasificación de reserva respecto a **datos de personal sustantivo (nombre y firma)** adscrito a esta Representación Social, en términos de la **fracción V, del artículo 110** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años, visibles en el expediente de investigación requerido por el particular.
- ♦ la clasificación de confidencialidad de aquellos **datos personales pertenecientes a personas físicas y morales, tales como nombre y firma de testigos, víctimas, ofendidos e imputados**, de conformidad con el **artículo 113, fracciones I y III** de la Ley de la materia, visibles en el expediente de averiguación previa en mención.

Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública de las mismas, previo pago de los costos de reproducción.



En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, identificable y demostrable. El divulgar la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito corresponde a personal sustantivo de esta Institución, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón de que, al proporcionar los nombres de personal sustantivo, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de dichas personas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. Superioridad de Interés Público. Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.





De igual manera, dar a conocer datos personales de los servidores públicos, facilitaría a los miembros de la delincuencia organizada, su actuar para coaccionar y así obtener información que utilizarían para actuar en contra de la seguridad de las personas y de su familia.

- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o **derechos de terceros**, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:

Tesis Aislada  
Novena Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Pleno  
Tomo: XI, Abril de 2000  
Tesis: P. LX/2000  
Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EL derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**



(Énfasis añadido)

Así las cosas, también dicha versión pública contiene **datos personales** que son susceptibles a ser resguardarlos sin necesidad de estar sujetos a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I** del **artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

**I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

**CAPÍTULO VI**

**DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

**II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información,** de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**VI.** Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.



En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las **fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente **a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012. Tomo 1 Material(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.





**B.2. Folio de la solicitud 0001701026220**

<b>Síntesis</b>	Documentos laborales de una exservidora pública
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información parcialmente clasificada como confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

"JCon base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Art. 4, párrafo 2, el cual establece que

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley*

*Solicito a los sujetos obligados enlistados, y a sus Órganos Autónomos Desconcentrados y Descentralizados*

**Fiscalía General de La República (Antes PGR)**

*Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE)*

*Secretaría De Hacienda y Crédito Público (SHCP)*

*Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)*

*Secretaría de Gobernación (SEGOB)*

*Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad)*

*Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)*

*Lo siguiente*

*Referente a la C. Maria Teresa Matilde Guerrero Igartua,*

*1)Si ha trabajado en esa dependencia, ¿cuál es su fecha de ingreso?, ¿cuál es su fecha de egreso?, motivo de la baja, funciones que desempeñó, puesto o puestos que ocupó durante el periodo que laboró, niveles salariales que tuvo, perfiles de los puestos que ocupó, sin importar si sus cargos fueron de confianza, libre designación, prestación de servicios profesionales por honorarios o cualquier otro.*

**2)El Formato Único de Personal (FUP) correspondiente o documento homólogo en el que se le da conocimiento de su nombramiento.**

*3)Los documentos, convenios, contratos, minutas y oficios que haya firmado durante el periodo laborado.*

*4)Saber si era personal obligado de presentar Declaración Patrimonial.*

*5)Fechas, monto de viáticos, motivo y duración de las comisiones foráneas, nacionales o internacionales, que haya tenido durante el periodo laborado.*



6) Si le fue asignado uno o más vehículos durante el periodo laborado, se requiere marca, submarca, modelo y periodo en el cual hizo uso del bien.  
Todos lo referente a documentos de los puntos anteriores, en versión pública." (Sic)

#### Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEDE y CPA.**

#### ACUERDO CT/ACDO/0032/2021:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **confidencial** únicamente de los datos personales contenidos en las documentales requeridas por el particular, de conformidad con el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP, tales como lo son la firma, RFC, nacionalidad, domicilio, etc.

Así las cosas, los **datos personales** son susceptibles a resguardarlos sin necesidad de estar sujetos a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I** del **artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

#### ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

#### CAPÍTULO VI

#### DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio



por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**VI.** Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

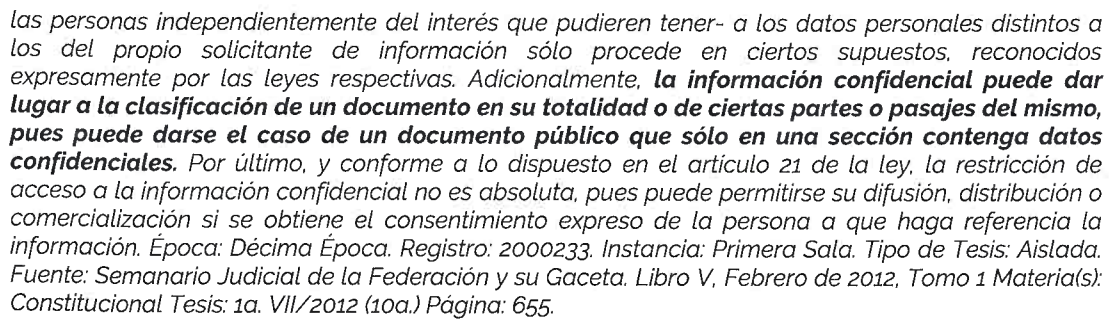
En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

*Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente **a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la **fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional**, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas*





En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales. -----



**B.1. Folio de la solicitud 0001701034420**

<b>Síntesis</b>	Documentos con asuntos a discutir y resolver en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Transparencia
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información parcialmente clasificada como reservada y confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

*"en cumplimiento al recurso de Revisión 954/20 del Índice del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, el comité de Transparencia de la Fiscalía General de Transparencia realizó su sesión el 01 de diciembre de 2020 para confirmar la improcedencia para otorgar datos personales y por la situación de la pandemia que sufre el País se llevan a cabo de manera virtual.*

*solicito el audio y video de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria 2020 de 01 de diciembre de 2020 del comité de transparencia de la Fiscalía General de la República y/o los documentos mediante los cuales, la presidenta del comité o cualquier otra autoridad correspondiente, envíen los asuntos a discutir y resolver en la Sesión en mención." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG**.

**Determinación del Comité de Transparencia:**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0033/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación y resguardo de los datos que revistan el carácter de reservado y confidenciales contenidos en el documento requerido, de conformidad con lo aplicable en lo dispuesto en el **artículo 110, fracción V** (hasta por un periodo de cinco años) y **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.



En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, identificable y demostrable. El divulgar la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito corresponde a personal sustantivo de esta Institución, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón de que, al proporcionar los nombres de personal sustantivo, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de dichas personas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. Superioridad de Interés Público. Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.





De igual manera, dar a conocer datos personales de los servidores públicos, facilitaría a los miembros de la delincuencia organizada, su actuar para coaccionar y así obtener información que utilizarían para actuar en contra de la seguridad de las personas y de su familia.

- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.
- La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

Por otro lado, los datos consistentes en los nombres de personas físicas, vinculados con el hecho de que participen o no en un procedimiento penal, actualizan el supuesto conocido como criterio afirmativo o negativo, es decir, existe una imposibilidad jurídica por parte de esta representación social para emitir pronunciamiento sobre la existencia o no de la información que en ese contexto se solicita; figura que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la **LFTAIP**, de la siguiente manera:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
De la Información Confidencial

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

- I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

En concatenación con los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, que en su parte conducente disponen lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y



III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales (**CNPP**), específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

#### CAPÍTULO II

#### DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

##### **ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.30.C. J/71 (9a.)  
Décima Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
160425 1 de 3  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**





*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.*

*Tomo: XIV, Septiembre de 2001*

*Tesis: I.3o.C.244 C*

*Página: 1309*

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*

*Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.*

*Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.*





De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la **CPEUM**, que a la letra dispone:

**ARTÍCULO 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

**B. De los derechos de toda persona imputada:**

**I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.**

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13 del **CNPP**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer dichos datos representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia,

[illegible]



**B.4. Folio de la solicitud 1700700002520 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua**

Síntesis	Expediente de algún caso de una víctima de homicidio
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información parcialmente clasificada como reservada y confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

"ALGUN **EXPEDIENTE DE ALGUN CASO DE UNA VICTIMA DE HOMICIDIO**" (Sic)

Posteriormente, en atención al requerimiento de información adicional que le fue notificado al solicitante por esta Representación Social, señaló lo siguiente:

"Cual es la cantidad que reciben los familiares para el apoyo?" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH, CPA y UTAG.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0034/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación y resguardo de los siguientes datos contenidos en el documento requerido:

- ♦ la clasificación de reserva respecto a **datos de personal sustantivo (nombre y firma)** adscrito a esta Representación Social, en términos de la **fracción V, del artículo 110** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años, visibles en el expediente requerido.
- ♦ la clasificación de confidencialidad de aquellos **datos personales pertenecientes a personas físicas, tales como nombre y firma de testigos, víctimas, ofendidos e imputados**, de conformidad con el **artículo 113, fracciones I** de la Ley de la materia, visibles en el expediente requerido.





Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública del expediente solicitado, previo pago de los costos de reproducción.

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. **Riesgo real, identificable y demostrable.** El divulgar la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito corresponde a personal sustantivo de esta Institución, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón de que, al proporcionar los nombres de personal sustantivo, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de dichas personas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. **Superioridad de Interés Público.** Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el



interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.

De igual manera, dar a conocer datos personales de los servidores públicos, facilitaría a los miembros de la delincuencia organizada, su actuar para coaccionar y así obtener información que utilizarían para actuar en contra de la seguridad de las personas y de su familia.

- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o **derechos de terceros**, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:

Tesis Aislada  
Novena Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Pleno  
Tomo: XI, Abril de 2000  
Tesis: P. LX/2000  
Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la**



información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, **la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**

(Énfasis añadido)

Así las cosas, también dicha versión pública contiene **datos personales** que son susceptibles a ser resguardarlos sin necesidad de estar sujetos a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I** del **artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. **La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

**CAPÍTULO VI**

**DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

II. **La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información,** de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

...

**VI.** Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.





Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las **fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente **a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



**B.5. Folio de la solicitud 1700700002720 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua**

<b>Síntesis</b>	Expediente de algún caso de una víctima de homicidio
<b>Sentido de la resolución</b>	Confirma
<b>Rubro</b>	Información parcialmente clasificada como reservada y confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

*"Quisiera pedirles por este medio, alguno de los casos de alguna mujer victima de homicidio, o la cantidad con la que han ayudado a su familia" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH, CPA y UTAG.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0035/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación y resguardo de los siguientes datos contenidos en el documento requerido:

- ♦ la clasificación de reserva respecto a **datos de personal sustantivo (nombre y firma)** adscrito a esta Representación Social, en términos de la **fracción V, del artículo 110** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años, visibles en el expediente requerido.
- ♦ la clasificación de confidencialidad de aquellos **datos personales pertenecientes a personas físicas, tales como nombre y firma de testigos, víctimas, ofendidos e imputados**, de conformidad con el **artículo 113, fracciones I** de la Ley de la materia, visibles en el expediente requerido.

Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública del expediente solicitado, previo pago de los costos de reproducción.



En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

I. Riesgo real, identificable y demostrable. El divulgar la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito corresponde a personal sustantivo de esta Institución, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón de que, al proporcionar los nombres de personal sustantivo, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de dichas personas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

II. Superioridad de Interés Público. Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.





De igual manera, dar a conocer datos personales de los servidores públicos, facilitaría a los miembros de la delincuencia organizada, su actuar para coaccionar y así obtener información que utilizarían para actuar en contra de la seguridad de las personas y de su familia.

- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o **derechos de terceros**, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:

Tesis Aislada  
Novena Época  
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta  
Pleno  
Tomo: XI, Abril de 2000  
Tesis: P. LX/2000  
Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO** TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO **POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático".** En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, **el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera;** así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, **la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**



(Énfasis añadido)

Así las cosas, también dicha versión pública contiene **datos personales** que son susceptibles a ser resguardarlos sin necesidad de estar sujetos a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I** del **artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. **La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

CAPÍTULO VI

**DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

II. **La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información**, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus lunciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.





En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las **fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente **a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- **debe ser tutelado por regla general**, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial **no es absoluta**, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.





**B.6. Folio de la solicitud 1700700002820 - Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua**

**Síntesis**

información sobre el apoyo que se les brinda a familiares de personas desaparecidas víctimas del feminicidio

**Sentido de la resolución**

Confirma

**Rubro**

Información parcialmente clasificada como reservada y confidencial

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito conocer informacion sobre el apoyo que se les brinda a familiares de personas desaparecidas victimas del feminicidio, y adjunte **pruebas del apoyo brindado**" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH y UTAG.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0036/2021:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación y resguardo de los siguientes datos contenidos en el documento requerido:

- ♦ la clasificación de reserva respecto a **datos de personal sustantivo (nombre y firma)** adscrito a esta Representación Social como lo es la FEVIMTRA y datos de datos de personal adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Chihuahua, en términos de la **fracción V, del artículo 110** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.
- ♦ la clasificación de confidencialidad de aquellos **datos personales** pertenecientes al beneficiario o beneficiarios contenidos en el Acta notarial de entrega de cheques, de conformidad con el **artículo 113, fracciones I** de la Ley de la materia.

Lo anterior, a fin de poner a disposición del particular la versión pública del documento requerido.



En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, identificable y demostrable. El divulgar la información, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la información de mérito corresponde a personal sustantivo de esta Institución, misma que podría ser utilizada con fines ilícitos, en razón de que, al proporcionar los nombres de personal sustantivo, se pondría en riesgo su vida, su seguridad o su salud, pues se harían identificables, y quedarían vulnerables ante terceros. En efecto, la difusión de la información en mención facilitaría que cualquier persona pudiera afectar la vida, seguridad o la salud de dichas personas e incluso la de sus familias, facilitando así la comisión de delitos.

En ese contexto, se ocasionaría un serio perjuicio en los derechos humanos antes mencionados, por lo que dicha difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados, de igual manera, al dar a conocer públicamente la información señalada, podría ocasionar un detrimento en las funciones desempeñadas, causándose una obstrucción y menoscabo de dichas funciones.

- II. Superioridad de Interés Público. Al permitir que se identifique al personal operativo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho personal, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo del personal con funciones de investigación.



De igual manera, dar a conocer datos personales de los servidores públicos, facilitaría a los miembros de la delincuencia organizada, su actuar para coaccionar y así obtener información que utilizarían para actuar en contra de la seguridad de las personas y de su familia.

- III. Principio de proporcionalidad. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar perjuicio, este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio de dichas personas. En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de salvaguardar los derechos humanos referidos con antelación, y previstos en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva antes manifestada obedece a la obligación consistente en proteger la vida, seguridad y en su caso la salud de tales personas físicas en virtud de las funciones que realizan.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o **derechos de terceros**, tales como el derecho a la vida, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:

Tesis Aislada  
Novena Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Pleno  
Tomo: XI, Abril de 2000  
Tesis: P. LX/2000  
Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**





(Énfasis añadido)

Así las cosas, también dicha versión pública contiene **datos personales** que son susceptibles a ser resguardarlos sin necesidad de estar sujetos a temporalidad alguna y a la que solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales; lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la **fracción I** del **artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

**I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

**CAPÍTULO VI**

**DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

**II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información,** de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**VI.** Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus lunciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las **fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente **a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- **debe ser tutelado por regla general**, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.

En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



**C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0037/2021:**

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

- C.1. Folio 0001701031420
- C.2. Folio 0001701031620
- C.3. Folio 0001701032520
- C.4. Folio 0001701032820
- C.5. Folio 0001701032920
- C.6. Folio 0001701033620
- C.7. Folio 0001701033920
- C.8. Folio 0001701034020
- C.9. Folio 0001701034120
- C.10. Folio 0001701034220
- C.11. Folio 0001701034520
- C.12. Folio 0001701034620
- C.13. Folio 0001701035920

Lo anterior, de conformidad con los motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

**Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta**

DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO
Folio 0001701031420 2021-01-20 1.- Número de personas contagiadas y/o sospechosas de covid -19 en el área de dirección general adjunta de relaciones laborales y apoyo jurídico. 2.- Total de servidores públicos que tienen el cargo de jefatura de departamento y subdirección sin contar con una licenciatura trunca o terminada en la dirección general de recursos humanos y organización. 3.- Total de expedientes de personal en activo e inactivos.	Por análisis de la solicitud en la <b>UTAG</b>
Folio 0001701031620 2021-01-20 Cuantas personas en total han tenido sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada de	Por falta de respuesta de





personas de 2006 a 2018 a nivel nacional. Se solicita enviar el desglose de personas por año y entidad federativa.

**CPA y FEMDH**

Folio 0001701032520 2021-01-20 1.- Que diga la experiencia profesional de la C. Martha Irene Paz Balderas. 2.- ¿En que puesto se encuentra adscrita la C. Martha Irene Paz Balderas? 3.- ¿Cuál es el perfil del puesto en el cual se encuentra adscrita la C. Martha Irene Paz Balderas? 3.- ¿Cómo obtuvo el puesto en el cual se encuentra adscrita la C. Martha Irene Paz Balderas? 4.- El expediente del concurso o procedimiento para la contratación de la C. Martha Irene Paz Balderas. 5.- ¿Cuál es el salario neto de la C. Martha Irene Paz Balderas? 6.- ¿Cuáles son las funciones y actividades que desarrolla la C. Martha Irene Paz Balderas? 7.- Exhiban el C.V. de la C. Martha Irene Paz Balderas. La C. Martha Irene Paz Balderas, labora en el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la Republica, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 2836 Edificio 101, Col. Tizapán San Ángel, Código Postal 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Por falta de  
alcance de  
respuesta de  
**CPA**

Folio 0001701032820 2021-01-20 Ref. Expediente 2019 Violación Art4. Hacemos referencia a su oficio FGR/UTAG/DG/4933/2020, por el que esa FGR informó que la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero ejerció acción penal bajo cierta carpeta de investigación iniciada en 2019 por la comisión del delito de Violación por un mexicano en EUA. Al respecto favor de proporcionar la siguiente información 1. El nombre y ubicación del juzgado ante quien esa FGR ejerció la referida acción penal por el delito de Violación en EUA. 2. El número de expediente bajo el que quedó radica la acción penal antes referida. La presente solicitud no requiere de la divulgación del nombre del imputado ni de ninguna otra persona del proceso, por lo que no puede clasificarse como confidencial para efectos de la ley de transparencia. Para la respuesta de esta solicitud la FGR no requiere crear documento ad hoc.

Por espera de  
nuevo  
pronunciamiento  
de la **CAIA**

Folio 0001701032920 2021-01-20 Ref. Año 2019 Violación Art4. Hacemos referencia a su oficio FGR/UTAG/DG/4933/2020, por el que esa FGR informó que la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero ejerció acción penal bajo cierta carpeta de investigación iniciada en 2019 por la comisión del delito de Violación por un mexicano en EUA. Al respecto favor de proporcionar la siguiente información 1. El año en que se cometió el delito de Violación que dio lugar a la acción penal en comento. La presente solicitud no requiere de la divulgación del nombre del imputado ni de ninguna otra persona del proceso, por lo que no puede clasificarse como confidencial para efectos de la ley de transparencia. Para la respuesta de esta solicitud la FGR no requiere crear documento ad hoc.

Por espera de  
nuevo  
pronunciamiento  
de la **CAIA**

Folio 0001701033620 2021-01-21 ver amb 3 Solicito las causas de todos los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental de 2012 al 08 de diciembre de 2020. Por fecha, causa penal, nombre del juzgado o tribunal y la entidad federativa, nombre del delito y el sentido de la sentencia y en qué consistió.

Brian Iván  
Delgado Antunez

Folio 0001701033920 2021-01-21 Se adjunta documento en formato PDF que contiene la solicitud de acceso a información, para visualizarlo se

Por análisis de la  
solicitud en la



recomienda utilizar el software Adobe. La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos se ubica en Blvd. Adolfo López Mateos 101, Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán, Álvaro Obregón, 10100 Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación se ubica en Carr. Picacho-Ajusco 167, Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14140, Ciudad de México	<b>UTAG</b>
Folio 0001701034020 2021-01-25 Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente información ¿Existe algún tipo de convenio de colaboración entre la CONAVIM y la FGR? En caso de existir, ¿en qué consiste la colaboración?	Por análisis en el CT
Folio 0001701034120 2021-01-22 Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente información 1.- En relación con el caso Cienfuegos, ¿La FGR ha recibido información por parte del ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos suscrita por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos? Favor de responder si o no 2.- ¿Se tiene una orden de extradición en contra de Cienfuegos? ¿Se tiene una orden de aprehensión en contra de Cienfuegos? Favor de responder si o no 3.- Sobre la investigación de la FGR contra Cienfuegos, ¿La evidencia usada por la FGR es exclusivamente proporcionada por los Estados Unidos? 4.- ¿Se tiene una investigación al mismo tiempo, independientemente de la hecha ya por la FGR por parte del gobierno Responder Si o no 5.- Considerando que Cienfuegos es un militar retirado, ¿Gozará del fuero militar en su juicio o será juzgado por el fuero común? 6.- Sobre el caso Fidel Herrera. ¿Hay un proceso penal o administrativo en su contra por parte del gobierno?	Por nuevo pronunciamiento de la <b>SEIDO</b>
Folio 0001701034220 2021-01-22 Por medio de la presente solicito de la manera más atenta, me sea informado sobre el numero de Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación que la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, ha abierto contra funcionarios públicos federales, estatales o municipales, en el periodo del 1 de diciembre del 2006 a la fecha, desagregando la información por año, tipo de delito, estado en el que se encuentra la averiguación o carpeta, sexo y edad del funcionario o funcionaria imputados, y entidad federativa donde se radicó la investigación. Sin mas por el momento agradezco las atenciones a la presente	Solicitada por análisis de la <b>UTAG</b>
Folio 0001701034520 2021-01-22 Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita proporcione la siguiente información: 1. Deseo	Por análisis de la solicitud en la <b>UTAG</b>



conocer los documentos que contengan el número de cárteles que operan en el Estado de México y en zona metropolitana de la Ciudad de México, así como información sobre los municipios en los que operan cada uno y quiénes son los principales líderes regionales de estos grupos delictivos. 2. Solicito se me proporcione un mapa en el que se aprecien las zonas de influencia de cada uno de esos grupos delictivos.

Folio 0001701034620 2021-01-22 SE ANEXA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Por falta de  
respuesta de  
**CPA**

Folio 0001701035920 2021-01-25 Favor de consultar el anexo. Gracias.

Por derivación  
tardía al **CENAPI**  
a sugerencia de  
**CPA**







## E. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se instruye o se analiza la procedencia o improcedencia de la información requerida

### E.1. Folio de la solicitud 0001700988620

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001700988620** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial

II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o

III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

I.- Copia simple de la identificación oficial del titular.

II.- Identificación oficial del representante, e

III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.



## E.2. Folio de la solicitud 0001700988820 – RRD 1884/20

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001700988820 – RRD 1884/20** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial

II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o

III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

I.- Copia simple de la identificación oficial del titular,

II.- Identificación oficial del representante, e

III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.



**E.3. Folio de la solicitud 0001701010020**

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001701010020** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

- I.- Identificación oficial
- II.- ~~Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o~~
- III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

- I.- Copia simple de la identificación oficial del titular,
- II.- Identificación oficial del representante, e
- III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.



#### E.4. Folio de la solicitud 0001701010220

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001701010220** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial

II.- Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o

III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

I.- Copia simple de la identificación oficial del titular,

II.- Identificación oficial del representante, e

III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.



#### E.5. Folio de la solicitud 0001701010320

De conformidad con lo establecido en los artículos 96 y 97 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 1/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, **el acta de sesión correspondiente a la solicitud 0001701010320** relacionada con el ejercicio de derechos ARCO, **se encontrará disponible para el particular** en las instalaciones de esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, Módulo de Atención Ciudadana o piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, **previa acreditación de su personalidad**, a través de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial

II.- ~~Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarios que permitan su identificación fehacientemente, o~~

III.- Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Del mismo modo, como lo prevé el artículo 77 de la LGPDPPSO, cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

I.- Copia simple de la identificación oficial del titular,

II.- Identificación oficial del representante, e

III.- Instrumento público, carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Finalmente, el Comité de Transparencia **instruye** a la UTAG a que informe al particular que, una vez notificada la respuesta, esta Institución tiene un plazo de quince días para hacer efectivo el derecho de acceso a sus datos personales, de conformidad con el artículo 91 de los Lineamientos Generales.







Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria electrónica del año 2021 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**



**Lic. Adi Loza Barrera.**

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la  
Presidente del Comité de Transparencia.



**Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez**  
Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos



**Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega**  
Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control



**Lcda. Gabriela Santillán García.**  
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**



**Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.**  
Director de Acceso a la Información  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Vo. Bo.**